

Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras para Ayuda al Ciudadano

EL GRANO DE ARENA

Año XX Informativo semanal



INFO XX.1078 6 de julio de 2020
informativo@attac.org http://attac-info.blogspot.com

Pueblos indígenas

Mundo

LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR. El término "civilización del amor" viene de lejos. Fue acuñado por el papa Pablo VI y retomado por el documento de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979). Leer en **http://attac-info.blogspot.com**

SALARIO BASICO UNIVERSAL. Una excelente y lúcida explicación a través de TEDxRio de la Plata sobre la posible y necesaria instalación del Salario básico Universal a la luz de la dinámica y acelerada aparición de nuevas y revolucionarias tecnologías en la economía mundial. En castellano con subtítulos en inglés: ¿Qué va a pasar cuando el aumento en la automatización haga que nuestros trabajos dejen de existir? ¿Será necesario que todos recibamos un ingreso universal por vivir? **Eduardo Levy Yeyati** reflexiona sobre esta alternativa pensando en un incierto futuro del trabajo: **https://youtu.be/HNKeQ1MlAqA**

LA INDUSTRIA ARMAMENTISTICA FOMENTA QUE EUROPA SE CONSOLIDE COMO FORTALEZA. En los últimos años, los crecientes llamamientos a la disuasión han intensificado la violencia física a que se enfrentan los migrantes en la frontera de la UE. La externalización de la frontera a través de acuerdos con los países de origen y tránsito señala la expansión de este proceso de securitización.

LA VÍA CAMPESINA CONDENA EL PLAN DE ANEXIÓN COLONIALISTA EN PALESTINA

"Lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales que utilicen en sus actividades y necesiten para poder disfrutar de condiciones de vida adecuadas. …" – Artículo 17.4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

Latinoamérica

PUEBLOS INDÍGENAS: DE LA CUARENTENA HISTÓRICA AL NEOGENOCIDIO - La etapa pos-Covid nos depara enormes desafíos, como la situación de los indígenas en las Américas. Más vale que nos preparemos y anticipemos reflexiones y propuestas sobre problemas que, siendo históricos y estructurales, no encuentran cabida en la mira de los estados nacionales reconvertidos, en contextos de neoliberalismos y globalización

CHILE: ESTUDIO DERRIBA EL MITO DEL EMPRENDEDOR: el 74% está condenado a la informalidad y el 56,5% no logra generar ganancias sobre el salario mínimo.

Mundo

LA INDUSTRIA ARMAMENTISTICA FOMENTA QUE EUROPA SE CONSOLIDE COMO FORTALEZA

En los últimos años, los crecientes llamamientos a la disuasión han intensificado la violencia física a que se enfrentan los migrantes en la frontera de la UE. La externalización de la frontera a través de acuerdos con los países de origen y tránsito señala la expansión de este proceso de securitización. Las ganancias financieras de las empresas internacionales de armamento en esta tendencia de militarización constituyen un gran obstáculo para el cambio de políticas.

En marzo, abril y mayo de este año, varios países europeos desplegaron fuerzas militares en sus fronteras nacionales. Se hizo para reforzar los controles y patrullas a raíz del cierre de fronteras y otras restricciones al movimiento debido a la crisis de la covid-19. Polonia desplegó 1.460 soldados en la frontera para apoyar a su guardia fronteriza y a la policía como parte de una operación militar más amplia en reacción a la covid-19. Y la policía portuguesa utilizó drones militares como complemento a sus controles de fronteras terrestres. Según reseñas de la OTAN, la República Checa, Grecia, Letonia, Lituania, Holanda (policía militar), Eslovaquia y Eslovenia, todas ellas estacionaron fuerzas armadas en sus fronteras nacionales.

Aunque algunos de estos despliegues se han revertido o lo serán a medida que se supere la crisis del coronavirus, no son desarrollos excepcionales. Muy al contrario, el uso de las fuerzas armadas para la seguridad y el control fronterizos es un hecho común en las fronteras exteriores de la UE desde la llamada crisis de refugiados de 2015. Forma parte de la continua militarización de las políticas europeas de fronteras y migración, bien conocida por incrementar los riesgos a que se enfrentan los refugiados y que cada vez se expande más a terceros países. El éxito de los grupos de presión de la industria militar y de seguridad ha sido un motor importante para estas políticas, de las cuales se han beneficiado las grandes compañías europeas de armas.

La militarización de las fronteras tiene lugar cuando los Estados miembros de la UE envían ejércitos a las regiones fronterizas, como lo hicieron en la Operación Sofía frente a la costa libia. Esta fue la primera misión militar de la UE para impedir la migración. Pero la militarización fronteriza también incluye el uso de equipos militares para el control de la migración, como helicópteros y patrulleros, así como el sistema de vigilancia de la UE Eurosur, que conecta los datos de la vigilancia de todos los Estados miembros. Además, los países de la UE ahora tienen más de 1.000 kilómetros de muros y vallas en sus fronteras equipados con tecnologías de vigilancia, control y detección, junto a un uso cada vez mayor de drones y otros sistemas autónomos. La UE también financia un flujo constante de proyectos de Investigación y Tecnología (I+T) para desarrollar nuevas tecnologías y servicios para supervisar y gestionar la migración.

Es un proceso que lleva décadas produciéndose. El Acuerdo de Schengen de 1985 y la posterior creación del Área Schengen, que combinó la apertura de las fronteras internas de la UE con un fuerte control en las fronteras externas, puede valorarse como el punto de partida de estos desarrollos. Después de 2011, cuando la llamada “Primavera Árabe” provocó temores de una migración masiva a Europa, y especialmente desde la “crisis de refugiados” de 2015, la UE aceleró enormemente el impulso y la

Parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz

Susana Merino

Necios europeos que acusáis a los migrantes sin razón
sin ver que sois responsables de lo mismo que juzgáis.
Si no hubierais dividido al África en más de cincuenta estados
y explotado sus riquezas sin dejarles nada a cambio
o dejándoles tan solo abominable miseria
otro sería su destino y otro a su tierra el arraigo.

Si con ansia sin igual solicitáis que se vayan,
¿cómo queréis que regresen mientras su tierra ocupáis?
y pretendéis que obren bien cuando les enseñáis el mal
ignorando sus calvarios y esperando indiferentes,
a que niños, jóvenes y viejos ahí se mueran sin chistar
¿Pues porqué os espantáis si la culpa la tenéis?

militarización de la seguridad fronteriza. Desde entonces, impedir la migración está a la cabeza de la agenda de la UE.

Una parte cada vez más importante del proceso de militarización fronteriza no tiene lugar en las fronteras europeas, sino mucho más allá de ellas. La UE y sus Estados miembros están incentivando a terceros países para que detengan a los migrantes mucho antes de que lleguen a Europa. Esta externalización de las fronteras ha adoptado muchas formas, desde ampliar los objetivos de las misiones EUCAP en Malí y Níger para incluir la prevención de la migración irregular, hasta financiar y capacitar a la Guardia Costera de Libia para devolver a los refugiados a la tortura y el hambre en los infames centros de detención libios. También incluye la donación de equipos de seguridad fronteriza, por ejemplo, de Alemania a Túnez, y fondos para compras, como la adquisición de buques de guardia costera por parte de Turquía para fortalecer sus capacidades operativas.

Además de las consecuencias directas de los esfuerzos de externalización de la frontera europea, estas políticas causan y empeoran los problemas de los terceros países afectados: desvían fondos y prioridades de desarrollo, arruinan las economías basadas en la migración y fortalecen regímenes autoritarios como los de Chad, Bielorrusia, Eritrea, y Sudán, proporcionando fondos, capacitación y equipamiento a sus fuerzas militares y de seguridad. Precisamente son estos órganos estatales los más responsables de la represión y los abusos de los derechos humanos. Todo esto alimenta los factores que impulsan la migración, incluida la violencia, la represión y el desempleo. Como tal, es casi una garantía para más refugiados en el futuro.

La agencia de seguridad fronteriza de la UE, Frontex, ha extendido también sus operaciones a países no pertenecientes a la UE. Las negociaciones en curso y las conclusiones de acuerdos con los países de los Balcanes dieron como resultado que la primera operación en Albania comenzara en mayo de 2019. Y esto es solo una pequeña parte del papel de expansión del Frontex en los últimos años. En respuesta a la “crisis de refugiados” de 2015, la Comisión Europea lanzó una serie de propuestas que incrementaron en gran medida los poderes de la agencia, que incluyen una asesoría vinculante con los Estados miembros para que aumenten su seguridad fronteriza y la concesión al Frontex del derecho a intervenir en los asuntos de los Estados miembros (incluso sin su consentimiento) por decisión de la Comisión o el Consejo de Europa.

Estas propuestas también incluyeron la creación de un cuerpo permanente de 10.000 guardias fronterizos y un presupuesto para comprar o arrendar su propio equipamiento. En concreto, el Frontex comenzó con un presupuesto de 6 millones de euros en 2005, que se aumentó a 143 millones de euros en 2015. Después ha ido creciendo de forma veloz de 239 millones de euros en 2016, hasta alcanzar la cifra de 460 millones de euros en 2020. La enorme expansión de la seguridad fronteriza de la UE y el control han ido acompañados de un rápido aumento de los presupuestos en general. En los últimos años, se han gastado miles de millones de euros en fortificar fronteras, establecer bases de datos biométricos, aumentar las capacidades de vigilancia y pagar a países no pertenecientes a la UE para que participen en este proceso de expansión.

Las negociaciones sobre el presupuesto para los próximos siete años para la UE, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, están aún en marcha. En la última propuesta de la Comisión Europea, que se posiciona claramente como respuesta a la pandemia de la covid-19, el fondo para fortalecer la seguridad fronteriza de los estados miembros, el Fondo Integrado de Gestión Fronteriza, ha asignado 12.500 millones de euros. Sus predecesores, el Fondo de Fronteras Exteriores (2007-2013) y el Fondo de Seguridad Interna-Fronteras (2014-2020), tenían presupuestos mucho más pequeños: 1.760 millones de euros y 2.700 millones de euros, respectivamente. Para el Frontex se reservan 7.500 millones de euros, con 2.200 millones de euros destinados a la compra o alquiler de equipos como helicópteros, drones y lanchas de vigilancia. Estos enormes aumentos de presupuesto son un ejemplo de la prioridad que la UE atribuye a detener la migración.

La narrativa que subyace en estas políticas y crecimientos presupuestarios es la percepción de la migración como una amenaza, como un problema de seguridad. Como escribe la investigadora, Ainhoa Ruiz (Centre Delàs): “el proceso de securitización incluye asimismo la militarización”, porque

“el paradigma predominante para proporcionar seguridad se basa en principios militares: el uso de la fuerza y la coerción, más armas equivale a más seguridad, la seguridad se logra eliminando amenazas”.

Esta narrativa no ha salido de la nada. Está promovida por políticos de derecha y seguida a menudo por partidos centristas e izquierdistas que temen perder votantes. Es importante destacar que está también impulsada por un amplio y exitoso lobby industrial. Según Martin Lemberg-Pedersen (profesor asistente en Estudios Globales sobre Refugiados, Universidad de Aalborg), las compañías de armas “se establecen como expertas en seguridad fronteriza y utilizan esta posición para enmarcar la inmigración hacia Europa como una amenaza para una seguridad cada vez más necesitada de productos [de seguridad] cada vez más avanzados”. La narrativa de la migración como un problema de seguridad prepara el escenario para que los militares, y las compañías de seguridad detrás del lobby del armamento comercial, ofrezcan sus productos y servicios como solución al problema. La gama de políticas de militarización mencionadas hasta ahora refleja una amplia adopción de esta narrativa.

Las organizaciones de presión de las grandes compañías militares y de seguridad europeas interactúan regularmente con la Comisión Europea y las agencias fronterizas de la UE. Tienen reuniones, organizan mesas redondas y se encuentran en ferias y conferencias militares y de seguridad. Los representantes de la industria también participan en grupos asesores oficiales, son invitados a presentar nuevas armas y tecnologías y a redactar propuestas de políticas. Estas propuestas pueden a veces ser tan influyentes que se adoptan como políticas, casi sin modificaciones.

Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando la Comisión decidió inaugurar el Instrumento que contribuye a la Seguridad y la Paz, un fondo destinado a la construcción de la paz y la prevención de conflictos. Los términos del fondo se ampliaron para cubrir, por ejemplo, la provisión a terceros países de equipos de seguridad no letales con fines de seguridad fronteriza. El nuevo documento de política resultó ser una reproducción, paso a paso, de una propuesta anterior de la organización de lod lobbys Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD). Sin embargo, quizás el éxito de mayor alcance de este tipo es la expansión del Frontex en una Guardia Europea de Fronteras. Años antes de que realmente sucediera, la industria ya había estado presionando para conseguir este resultado.

Las mismas compañías que están a la vanguardia del lobby de seguridad y control fronterizo son también, como era de esperar, las grandes ganadoras de los contratos de la UE y los Estados miembros en estos ámbitos. Entre ellas se incluyen tres de las mayores compañías de armas europeas (y globales), a saber, Airbus (Paneuropean), Leonardo (Italia) y Thales (Francia). Estas compañías están muy activas en muchos aspectos del mercado de seguridad y control fronterizo. El principal producto de Airbus y Leonardo en este campo son los helicópteros, con fondos de la UE que pagan muchas compras de la UE y de terceros países. Thales proporciona radar, por ejemplo, para buques de patrulla fronteriza, y está muy involucrada en la identificación biométrica y digital, especialmente después de haber adquirido al líder del mercado, Gemalto, el pasado año.

Estas tres empresas son las principales beneficiarias de la obsesión europea contra la migración. Al mismo tiempo, estas tres compañías favorecen también nuevas corrientes migratorias a las costas de Europa a través de su comercio de armas. Son responsables de partes significativas de las exportaciones de armas de Europa a países en guerra, y proporcionan las armas utilizadas por las partes en conflictos armados internos, por violadores de los derechos humanos y por regímenes represivos. Estas son las fuerzas que alimentan las razones por las cuales las personas se ven obligadas ante todo a huir.

Muchas otras compañías militares y de seguridad ganan también hasta cientos de millones de euros en grandes proyectos de control y seguridad fronteriza orientados a la logística y el transporte. El constructor naval holandés Damen suministró patrulleros fronterizos no solo a muchos países del sur de Europa, sino que también los vendió, a pesar de la polémica surgida, a Libia y Turquía, entre

otros. Sus barcos también se han utilizado en las operaciones del Frontex, en la Operación Sophia y en el Paso entre Calais y Dover.

La compañía española, European Security Fencing, proporcionó alambre de púas para las vallas de concertinas alrededor de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en Marruecos, así como la valla en Calais y las vallas en las fronteras de Austria, Bulgaria y Hungría. Frontex, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y Grecia alquilaron drones de vigilancia fronteriza a Elbit e Israel Aerospace Industries (IAI), que son dos compañías militares israelíes que promocionan de forma habitual sus productos como “probados en combate” o “probados en el campo de batalla” contra los palestinos.

Civipol, una empresa público-privada francesa propiedad del Estado, y varios grandes productores de armas (incluidos Thales, Airbus y Safran) ejecutan una serie de proyectos de seguridad fronteriza financiados por una serie de países miembros de la UE en terceros países. Esto incluye la creación de bases de datos de huellas digitales de todas las poblaciones de Malí y Senegal, lo que facilita la identificación y deportación de sus ciudadanos desde Europa. Estos son solo algunos ejemplos de las empresas que se benefician de los miles de millones de euros que la UE y sus Estados miembros gastan en una amplia gama de compras y proyectos en su intento de detener la migración.

El número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo creció hasta alcanzar la asombrosa cifra de 79,5 millones a finales del año pasado. En lugar de ayudar a eliminar las causas fundamentales de la migración, las políticas fronterizas y migratorias de la UE, así como sus exportaciones de armas al resto del mundo, provocarán más refugiados en el futuro. Las consecuencias de estas políticas ya han sido devastadoras. Como han advertido repetidamente los expertos en el campo de la migración, la militarización de las fronteras empuja principalmente a los migrantes a tomar rutas de migración alternativas que a menudo son más peligrosas y conllevan los riesgos de tener que depender de las redes de contrabando criminal. El mar Mediterráneo se ha convertido en un triste testigo de esta realidad, transformándose en cementerio para el creciente porcentaje de refugiados que intentan cruzarlo.

El enfoque de la UE en materia de seguridad fronteriza no se sostiene por sí solo. Muchos otros países, en particular los occidentales y los que padecen líderes autoritarios, siguen la misma narrativa y políticas. Los gobiernos de todo el mundo, pero particularmente los de EE. UU., Australia y Europa, continúan gastando miles de millones de euros en equipos y servicios de control y seguridad fronterizos. Y planean aumentar los presupuestos aún más en los próximos años. Para las compañías militares y de seguridad son muy buenas noticias: se espera que el mercado global de la seguridad fronteriza crezca más de un 7% anual durante los próximos cinco años hasta alcanzar un total de 65.000 millones de dólares en 2025. Riqueza que pasará a pertenecer a los muy pocos ganadores de políticas cada vez más restrictivas dirigidas contra personas vulnerables que se ven obligadas a huir.

Mark Akkerman es uno de los investigadores de Stop Wapenhandel (la campaña holandesa contra el comercio de armas) y del Transnational Institute (TNI), especializado en temas relativos a la militarización de las fronteras y el papel de la industria militar y de seguridad. Es también activista por un movimiento sin fronteras.

Fuente: Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

LA VÍA CAMPESINA CONDENA EL PLAN DE ANEXIÓN COLONIALISTA EN PALESTINA

“Lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales que utilicen en sus actividades y necesiten para poder disfrutar de condiciones de vida adecuadas. …” – Artículo 17.4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

(Harare, 2 de julio de 2020) Firmes en nuestra solidaridad con todos los pueblos que luchan por la Soberanía Alimentaria y la realización plena de los Derechos Campesinos, La Vía Campesina expresa su apoyo inquebrantable al pueblo y movimiento campesino de Palestina, en unidad contra los intentos israelíes respaldados por Estados Unidos de anexión de tierras, aguas y territorios vitales de la ocupada zona C Palestina. En nombre de nuestros 200 millones de miembros agrupados en 182 organizaciones locales y nacionales de todo el mundo, como La Vía Campesina sumamos nuestra voz a la oposición internacional (1) frente a los planes ilegales de anexión de Israel y reiteramos nuestra demanda de poner un fin a la ocupación israelí.

"En el contexto Palestino, la cuestión de la Soberanía Alimentaria es de principal importancia teniendo en cuenta que la ocupación militar israelí tiene control total sobre los recursos naturales palestinos, incluyendo la tierra, el agua, las áreas de pastoreo y las zonas de pesca." [2]

La anexión criminal del granero de Palestina

Desde 1967, la ocupación israelí de Palestina ha incluido un sistema de control en el que los recursos naturales son apropiados y explotados para el beneficio de Israel en detrimento de las vidas y los medios de subsistencia palestinas. Esto ha creado condiciones cada vez menos habitables para las y los palestinos en los territorios ocupados con la intención de obligarles a trasladarse y permitir a Israel la anexión permanente de tierras, aguas y territorios.

En el Valle del Jordán, por ejemplo, las condiciones inhabitables provocaron una reducción importante en la población palestina a lo largo de las últimas décadas, de 320.000 en 1967 a solo 58.239 en la actualidad[3]. De acuerdo a la Asociación Académica Palestina para el Estudio de la Política Internacional, el Valle del Jordán "es el área más fértil y rica en recursos de Cisjordania, con reservas de terreno vitales para la expansión natural. Es conocido por su rica producción agrícola, su clima cálido y abundante recursos hídricos. También atrae al turismo con más de 80 sitios de importancia histórica y cultural."

Durante Julio, el gobierno israelí tiene la intención de imponer una anexión ilegal del 30% del territorio ocupado de Cisjordania y aproximadamente el 50% del Área C, la zona de Palestina bajo pleno control israelí administrativo y de seguridad según los acuerdos de Oslo. El Área A, administrada exclusivamente por la Autoridad Palestina, constituye apenas el 18% de Cisjordania, mientras que el Área B, supuestamente bajo control civil palestino y control de seguridad conjunto entre Israel y Palestina, alcanza el 21% del mismo territorio. Por otro lado, el Área C incluye más del 61% de Cisjordania, ubicada entre las Áreas A y B, y está bajo completo control israelí, incluyendo la seguridad, planificación y zonificación.

Según se describe en Oslo I y Oslo II, se suponía que el total de las Áreas A, B y C debía estar bajo la gobernanza plena de la Autoridad Palestina antes del año 2000, pero este respeto al derecho palestino a la autodeterminación no se ha materializado en absoluto[4].

El Valle del Jordán, como describimos antes, es considerado el granero del futuro Estado palestino. Esta zona contiene recursos de tierras y aguas vitales para la expansión natural de pueblos y ciudades y para la industria agrícola de Palestina. Aquí se encuentran los recursos hídricos más importantes de toda Cisjordania y es esencial para las vidas y los medios de subsistencia de la mayoría del campesinado palestino, sus familias y sus compatriotas de la ciudad. En resumen, su anexión violaría gravemente los derechos de todo el pueblo palestino, en especial de sus campesinos y campesinas. Israel ya controla la mayor parte de los recursos hídricos de la zona, causando así dificultades de acceso al agua para las y los palestinos, particularmente en el Área C.[5] Bloqueando el acceso a la tierra, el agua y el territorio, Israel está intentando consolidar su control sobre la producción de alimentos de Palestina y prevenir todo intento de ir hacia la auto-suficiencia, la soberanía alimentaria y distanciarse de la economía de ocupación.

La Vía Campesina se solidariza con su organización miembro en Palestina, la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC, por sus siglas en inglés), y convoca a amigxs y aliadxs a unirse al repudio del “Plan de anexión” israelí respaldado por los Estados Unidos. Consideramos este plan una violación explícita del derecho internacional, incluyendo la Declaración de Derechos Campesinos de la ONU, y destacamos que impide el acceso de la población nativa a sus propios recursos naturales, como la tierra y aguas, les quita la posibilidad de producir sus propios alimentos y optar por el sistema alimenticio que les sea de mayor conveniencia; un sistema alimenticio sustentable, resistente, productivo, diverso y culturalmente apropiado.

Convocamos a la comunidad internacional y a todas las personas que luchan por los derechos humanos a:

– Tomar medidas urgentes y efectivas para rechazar la propuesta de EE.UU. que viola las resoluciones de la ONU y detener los planes israelíes de anexión ilegal en el Área C. La propia ONU, junto con la comunidad internacional, debe actuar de inmediato para detener los planes de anexión de Israel, defender los derechos de los palestinos y defender tanto el derecho internacional como la credibilidad de la ONU;

– Actuar de manera decisiva, incluyendo la interponiendo toda medida legal disponible para exigir que se asuman las responsabilidades con el fin de detener las nuevas anexiones y la ruptura de la integridad territorial palestina, y garantizar la rápida anulación de las medidas que ya hayan sido anunciadas o implementadas.

¡La solidaridad es la ternura de los pueblos! **¡Viva Palestina libre de anexión!**

[1] https://www.eccpalestine.org/un-rights-experts-call-for-global-opposition-to-israelsannexationplans/
[2] https://viacampesina.org/en/declaration-of-the-international-conference-on-food-sovereignty-colony-and-frontiers/
[3] http://www.passia.org/maps/view/74
[4] Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas: “La realidad del área C: desde la perspectiva de los derechos humanos”, 2019.
[5] Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas: “Hoja de datos 1- Situación actual en el Valle del Jórdan”, 2019.
Más información: **https://www.uawc-pal.org/index.php?&lang=en**

Latinoamérica

PUEBLOS INDÍGENAS: DE LA CUARENTENA HISTÓRICA AL NEOGENOCIDIO

Magdalena Gómez *

La etapa pos-Covid nos depara enormes desafíos, como la situación de los indígenas en las Américas. Más vale que nos preparemos y anticipemos reflexiones y propuestas sobre problemas que, siendo históricos y estructurales, no encuentran cabida en la mira de los estados nacionales reconvertidos, en contextos de neoliberalismos y globalización.

El sacerdote jesuita Javier Ávila, con varias décadas de acompañamiento a los rarámuris, señaló: Estos tiempos y estas emergencias no son de hoy ni de ayer; son de siempre. Lamentablemente nuestras respuestas tampoco son de hoy, ni de ayer, sino las de siempre. Seguimos buscando cómo atacar los efectos, dejando intocables las causas. ¿Cómo se le pide a una comunidad que se aísle, cuando todo lo importante para ellos es hacerlo en comunidad, celebrando juntos, planeando juntos, trabajando juntos, organizando las cosas entre todos?

Así es la única forma de hacer justicia, de celebrar la fiesta, de arreglar y no se le puede pedir a alguien cuyo sustento lo tiene fuera de su casa que se quede en casa. Se va a morir antes, y no por la pandemia. Ellos manifiestan otros temores, no a morir, sino al hambre, al dolor, a la injusticia, a la pérdida de libertad y de autonomía.

Igual que reiteran numerosos pueblos en Sudamérica, aseveró que imponer un neoliberalismo violentando los derechos humanos de los indígenas y a la naturaleza, es genocidio. (Diálogos Encuentro Mundial de Valores, 12/6/20). Queda así planteado el nexo de la cuarentena histórica de los pueblos respecto al Estado y abierto un tema que será preciso reconceptualizar, el neogenocidio.

El contexto de la pandemia donde el vínculo de la catástrofe sanitaria con la crisis climática es evidente, nos obliga a escuchar el grito de auxilio que desde la Amazonia se emite sobre el riesgo inminente de genocidio. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica alerta sobre la grave situación de los pueblos en un territorio vasto y selvático, con una población vulnerable, dispersa y mayoritariamente indígena, deficientes redes hospitalarias y bajo jurisdicción de los nueve países de la cuenca (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Guyana Francesa y Surinam).

Por ejemplo, en Brasil las aldeas no pueden hacer el aislamiento social, pues son tierras deforestadas, invadidas por mineros, madereros y acaparadores. Además del capital trasnacional, los incendios han sido devastadores. El alcalde de Manaos, capital de Amazonas, ha reiterado el riesgo de genocidio en lógica opuesta a la del presidente Bolsonaro: cada indio que muere lleva con él una parte de la historia, que no es escrita sino pasada de forma oral de generación en generación.

Si los indios muriesen, estaríamos perdiendo más de 10 mil años de civilización indígena en nuestra región y sería imperdonable.

En México, dirán algunos, no estamos como en la Amazonia, desde las miradas del racismo encubierto y/o el interés puesto en un proyecto político del que los pueblos no son artífices en la llamada Cuarta Transformación, como no lo fueron en las anteriores. Con la pandemia no se conoce la afectación exacta a los pueblos, sólo en términos de contagios y fallecimientos, pues no son factor explícito de atención.

La crisis se vive en términos de las casi nulas condiciones de acceso a la salud, la inseguridad, los desplazamientos. No existe respuesta oficial contundente. Sin embargo, si ubicamos la cuarentena histórica, la del pre-Covid observamos a los pueblos indígenas en México enfrentando a los megaproyectos esenciales, como el Tren Maya y el corredor transístmico, así como a los concesionados en minería.

Encontramos que en general las decisiones oficiales se toman a nombre del supuesto progreso, al margen de los hipotéticos beneficiarios del mismo. Los pueblos y sus comunidades organizados les llaman proyectos de muerte, pues atentan contra la libre determinación y propician su desaparición. Mientras, de manera oficial se increpa a ellos y a sus seguidores como negacionistas.

Más allá de las falacias que se endilgan a las resistencias indígenas, tenemos las oficiales: desde que es sólo un tren hasta que no cortaremos ningún árbol por el Tren Maya y estamos exentos de manifestación de impacto ambiental, para luego solicitarla y cuantificar los miles de árboles que se cortarán.

Aún no se avanza en lógica de reconocer neogenocidio, pues, como sabemos, se definió al delito de lesa humanidad de genocidio en el contexto del exterminio masivo de los judíos europeos por los nazis alemanes. Ese origen ha generado rechazo a conceptualizar como tal a numerosos crímenes y políticas de exterminio de ayer y hoy.

* Abogada especialista en derecho indígena. Integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

CHILE: ESTUDIO DERRIBA EL MITO DEL EMPRENDEDOR: EL 74% ESTÁ CONDENADO A LA INFORMALIDAD Y EL 56,5% NO LOGRA GENERAR GANANCIAS SOBRE EL SALARIO MÍNIMO

Andrés Cárdenas

Estudio derriba el mito del emprendedor: el 74% está condenado a la informalidad y el 56,5% no logra generar ganancias sobre el salario mínimo

Haciendo eco de las palabras que el Presidente Sebastián Piñera dijo el pasado 14 de octubre -cuando señaló a Chile como un “oasis” en la región y dijo que las pequeñas y medianas empresas son el “corazón, el alma, la columna vertebral y el motor de nuestro país”- la Fundación Sol comenzó un análisis sobre los microemprendimientos nacionales. El estudio pone en evidencia las precarias condiciones en que se emprende en Chile: existe en el país un total de 2.057.903 microemprendimientos, de los cuales más de un millón y medio son informales, vale decir sin haber iniciado actividades en el SII, sin permiso del municipio y sin separar los gastos de la empresa de los gastos del hogar. A esto se suman las ganancias mensuales exiguas y el escaso impacto en la generación de empleo, porque solo el 15% contrata a otras personas, siendo en su mayoría emprendimientos por cuenta propia.

La Fundación Sol realizó un estudio sobre la situación que viven los microemprendimientos en Chile. A partir de la encuesta EME 6, elaborada por el Ministerio de Economía y el INE, el trabajo del investigador del centro de estudios Benjamín Sáez concluyó, entre varios aspectos que retratan la realidad de estos proyectos, que la mayoría se desarrolla a la sombra de la informalidad, que se mantiene el predominio masculino en la categoría empleador, y que más de la mitad no logra generar ganancias superiores al salario mínimo.

"El estudio busca problematizar supuestos sobre el 'mito del emprendimiento en Chile', ponderando las condiciones materiales reales en que las y los emprendedores trabajan", señalan desde la Fundación Sol.

Cabe mencionar que los microemprendimientos, que corresponden a un 24,3 % de las personas ocupadas, son todas aquellas empresas de 10 trabajadores o menos (incluyendo al empleador), en sintonía con los parámetros de la definición nacional de Pymes (máximo 9 trabajadores y un monto anual de no más de 2400 UF en ganancias).

En Chile se contabilizan 2.057.903 microemprendimientos de los cuales, según los datos analizados por la Fundación Sol, solo el 15% contrata a otras personas, siendo en su mayoría emprendimientos por cuenta propia, los que a su vez se encuentran, con pocas excepciones, en el sector informal.

Los datos del estudio contrastan con el entusiasmo del Presidente Sebastián Piñera, quien en un discurso el pasado 14 de octubre señaló a Chile como un “oasis” en la región y dijo que las pequeñas y medianas empresas son el “corazón, el alma, la columna vertebral y el motor de nuestro país”.

Informalidad predominante

De acuerdo a la definición oficial de informalidad, un más de la mitad de las microempresas tienen esta condición. Y del total, un tercio presenta un nivel "alto", es decir, sin haber siquiera iniciado actividades en el SII y sin permiso del Municipio. Pero eso no es todo, "al utilizar una definiciión ampliada de informalidad", explican, incorporando a quienes no mantienen una contabilidad completa o no pueden separar los gastos de la empresa de los gastos del hogar, el porcentaje de se eleva 74%. Bajo esta mirada, en Chile existen 1.515.937 microemprendimientos en dicha condición.

Respecto a las ganancias, el estudio afirma que el 56,5% de las microempresas informales no logra generar ganancias superiores al Salario Mínimo ($288.000 al momento de la encuesta) y el 82% no supera los $576 mil pesos.

Los datos revelan además que se mantiene el predominio masculino sobre la categoría de empleador. Un 74,6% de las microempresas que emplean trabajadores corresponden a un empleador hombre y solo un 25,4% a mujeres. Cabe mencionar que tan solo 1 de cada 10 mujeres que tienen una microempresa logran superar los $576 mil pesos de ganancia mensual.

El estudio señala que cerca de un 40% de los microemprendimientos se concentran en la Región Metropolitana. Y al observar el comportamiento regional de la informalidad, se tiene que en 7 regiones del país esta supera el 74% del total de microemprendimientos. Se trata de Arica y Parinacota (84%), La Araucanía, Ñuble (77,5%), Aysén (76,9%), Coquimbo (76,8%), Los Ríos (76,7%) y la Metropolitana (74,8%).

El documento observa detalles como el lugar donde se realizan las actividades, que pueden ser microempresas que se desempeñan en hogares o en la calle; los sectores más golpeados de la economía por la informalidad, y cuáles son los recursos que requirieron de capital para iniciar su actividad. Por ejemplo, el 77 % se vio obligado a recurrir a sus propios recursos para lanzar su emprendimiento.

RTF :http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1078.doc

PDF:http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1078.pdf

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o

CAMBIO DE MAIL:

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo

Para obtener un número anterior entrar en

http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo

Distribución: Tom Roberts

Edición: *Susana Merino* - Co fundadora de ATTAC Argentina